

Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial: San Salvador, a las quince horas del día ocho de febrero de dos mil diecinueve.

Por recibida la anterior solicitud de información suscrita por el ciudadano XXXXXXXX en calidad de Apoderado de XXXXXXXX, en la cual requirió:

“Se me extienda una Constancia Certificada, en la cual se haga constar, sí el señor XXXXXXXX, tiene o no interpuestas demandas en los Tribunales de lo Civil o Mercantil del Órgano Judicial de El Salvador...” (sic).

Sobre la petición anterior se hacen las consideraciones siguientes:

I. 1. En efecto el objeto de la Ley de Acceso a la Información Pública (en adelante LAIP), según lo establecido en su artículo 1 es la de “garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las Instituciones del Estado”. Y según el artículo 4 letra a) de ese mismo cuerpo normativo, establece que la información pública está regida por el principio de máxima publicidad, que exige que la información en poder de los entes obligados sea pública y su difusión sea irrestricta, salvo excepciones expresamente establecidas en la ley.

2. El artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública, establece el tipo de información que se considera oficiosa, o mejor dicho que se debe dar a conocer al público, y el artículo 13 de la misma ley, establece qué tipo información debe darse a conocer a todas las personas por parte del Órgano Judicial.

3. Pese a todo ello, no toda petición de información que se solicite puede ser evacuada, por tanto jurisprudencialmente se han construido límites a la obtención de la información por esta vía administrativa que ofrece la Ley de Acceso a la Información Pública, haciéndose una distinción a lo que debe considerarse información de índole administrativo y la información de carácter jurisdiccional.

II. Al respecto, específicamente en las resoluciones de los procesos de amparo con referencias 422-2011 de fecha nueve de enero de dos mil quince; 482-2011 de fecha seis de julio de dos mil quince; 553-2013 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil quince; y el proceso de inconstitucionalidad con referencia 7-2006 de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, todos de la Sala de lo Constitucional de esta Corte; se indicó que a partir de una interpretación sistemática de los arts. 110 literal e) de la LAIP y 9 del Código Procesal Civil y Mercantil se determina que hay una intención manifiesta de que la información relativa a los procesos jurisdiccionales se obtenga de acuerdo con las normas que rigen a estos, y no con las normas estatuidas por la Ley de Acceso a la

Información Pública. En este sentido, debe entenderse que el acceso a la información pública que facilita la LAIP únicamente alude al ámbito administrativo de los juzgados y tribunales, no al jurisdiccional.

En este contexto, se establece que: “... la información jurisdiccional es todo dato que constata la existencia o realización de un acto que tiene efectos o consecuencias directas o indirectas en un proceso o procedimiento tramitado ante autoridades que ejercen jurisdicción, tales como fases del proceso, demandas, informes, audiencias, incidentes, recursos, decisiones, entre otros. Este tipo de información alude a los actos por medio de los cuales se inicia, impulsa y finaliza un proceso. Así las cosas, la idea de información administrativa resulta excluyente: será administrativa toda información que no sea jurisdiccional o que no tenga una conexión con los actos que producen consecuencias en los procesos o procedimientos judiciales, tales como el contenido de los libros administrativos, agendas de sesiones, estadísticas, número de referencia de proceso en trámite o fenecidos, etc. (...) el acceso a la información pública que facilita la LAIP únicamente alude al ámbito administrativo de los juzgados y tribunales, no al jurisdiccional, pues resulta factible obtener información sobre este último de conformidad con las reglas que rigen la materia correspondiente...” (sic).

Sobre el efecto vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional en la improcedencia emitida en el proceso de hábeas corpus con referencia 445-2014, de fecha 25 de septiembre de 2014, la cual puede ser consultada directamente en el Portal del Centro de Documentación Judicial –por ser información de carácter oficiosa– se “... *ha afirmado la obligación de los aplicadores jurisdiccionales o administrativos de cumplir con lo ordenado en las reglas adscritas a las disposiciones constitucionales, así como con lo dispuesto en la interpretación de los contenidos de los derechos fundamentales efectuada a través de los procesos constitucionales, entre ellos, los de amparo y hábeas corpus...*” (itálicas agregadas).

En dicha decisión, la Sala de lo Constitucional indicó que sus resoluciones y fallos “... no pueden entenderse como documentos conformados por segmentos aislados e incoherentes, carentes de efectos obligatorios, sino como un todo armónico y unitario en el que se reflejan y concretiza la actuación jurisdiccional y la fundamentación y decisión del tribunal, todo lo cual está dotado de plena obligatoriedad para las partes procesales; y en el caso de las resoluciones y fallos de la Sala de lo Constitucional, *estos tienen efectos vinculantes jurídicamente para las autoridades*” (itálicas y resaltados agregados).

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la resolución emitida en el proceso de inconstitucionalidad con referencia 7-2006, del veinte de agosto del dos mil catorce, en la cual literalmente se dijo: “Esta resolución únicamente delimita los ámbitos competenciales que corresponden al Oficial de Información de la Corte Suprema de Justicia y los que atañen a esta Sala. En realidad, lo que se ha hecho es aclarar que la información administrativa que corresponda al Órgano Judicial deberá ser tramitada ante el primero, mientras que la información jurisdiccional ante los respectivos tribunales...” (sic).

En consonancia con lo antes relacionado, es preciso acotar que el Instituto de Acceso a la Información Pública por resolución con referencia NUE 160-A-2015 (MV), de fecha diecisiete de mayo del dos mil dieciséis, sostuvo que “...el art. 110 letra f) de la LAIP reconoce la vigencia de todas aquellas normas contenidas en leyes procesales relativas al acceso de expedientes durante el período de su tramitación. En tal sentido, y en concordancia con lo resuelto por la Sala de lo Constitucional en la sentencia de inconstitucionalidad 7-2006 y 6-2012, de interpretarse que el legislador deliberadamente estableció que el acceso a los expedientes relacionados con normas procesales se rige por éstas y no por lo dispuesto en la LAIP...”.

III. En ese orden de ideas, en el presente caso el solicitante en concreto solicita “una constancia certificada, en la cual se haga constar, sí el señor XXXXXXXX, tiene o no interpuestas demandas en los Tribunales de lo Civil o Mercantil del Órgano Judicial de El Salvador...”, es decir, está solicitando por esta vía administrativa información que debe ser requerida ante cada uno de los tribunales aludidos, pues esta petición implica que cada juzgador deba verificar dentro de sus procesos judiciales lo requerido; de ahí que, se trate de información jurisdiccional por estar vinculada al inicio de procesos civiles o mercantiles concretos, a los cuales no alcanza la aplicabilidad de la Ley de Acceso a la Información Pública, tal como se indica en la jurisprudencia citada.

En consecuencia, conforme a los criterios sostenidos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Instituto de Acceso a la Información Pública –antes citados– se determina que la información solicitada es de carácter jurisdiccional y, por tanto, escapa del ámbito de aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues en este caso solicita se brinde información propia de tribunales. En consecuencia, no le compete a la suscrita tramitar por esta vía administrativa la solicitud presentada en fecha siete de febrero del presente año, por el ciudadano XXXXXXXX en calidad de Apoderado de XXXXXXXX, sino que debe avocarse ante las autoridades judiciales respectivas y solicitar esta información directamente en los Tribunales correspondientes.

En igual sentido se ha pronunciado esta Unidad, al requerírsele información referente a situaciones relativas a la tramitación de juicios o procesos de cualquier materia, y para ello podemos invocar como antecedentes las resoluciones emitidas el 13/03/2017 y 30/03/2017, en los expedientes con referencias 2216 y 2286 –respectivamente–; en los cuales se mantiene el criterio de que dicha información, por su naturaleza jurisdiccional, debe ser requerida directamente ante los tribunales correspondientes

Por tanto, con base en los razonamientos precedentes y artículos 71 y 72 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se resuelve:

1) Declarar la incompetencia de la suscrita Oficial de Información Interina del Órgano Judicial para tramitar la petición de información del ciudadano XXXXXXXX en calidad de Apoderado de XXXXXXXX, relacionada en el prefacio de esta resolución, por ser la información requerida de índole jurisdiccional, por las razones indicadas en esta resolución.

2) Notifíquese.




Lcda. Eva Marcela Escobar P.

Oficial de Información Interina del Órgano Judicial

NOTA: La Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial ACLARA: que la presente es una copia de su original, a la cual le fueron eliminados ciertos elementos para la conversión en versión pública de conformidad con los artículos 30 y 24 letra c) de la Ley de Acceso a la Información Pública.